



Al contestar cite Radicado 2026-2-002000-020934 Id: 756966  
Remitente: OFICINA ASESORA JURIDICA  
Destinatario: JUZGADO 02 FAMILIA - CAUCA - POPAYAN  
Fecha: 04-05-2026 21:54:01  
Folios: 9  
Anexos: 2 Documentos electrónicos



Bogotá D.C., 4 de mayo de 2026

**Señora Juez**

BEATRIZ MARIU SANCHEZ PEÑA  
Juzgado Segundo de Familia  
[j02fapayan@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:j02fapayan@cendoj.ramajudicial.gov.co)  
Popayán - Cauca

<b>ACCIONANTE:</b>	FUNDACIÓN ATHYRA
<b>ACCIONADA:</b>	MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTRO
<b>RADICADO:</b>	68001-3109-014- <b>2026-00197-00</b>
<b>REFERENCIA:</b>	TUTELA
<b>ASUNTO:</b>	INFORME DE CONTESTACIÓN Y RECURSOS DE REPOSICION FRENTE AL AUTO No. 904 DEL 30 DE ABRIL DE 2026

Respetado Señor Juez,

El suscrito, identificado como aparece en mi antefirma, en mi calidad de Director Jurídico del Ministerio del Interior, de conformidad con la Resolución No. 1289 del 02 de septiembre de 2025 (**anexo 1**) y Acta de Posesión del 11 del mismo mes y año, en ejercicio de las funciones de representación judicial y extrajudicial del Ministerio, de acuerdo con lo señalado en el Decreto 714 de 2024 (**Anexo 2**), de manera atenta, presento informe de contestación a la acción de tutela de la referencia, **conforme a la información y documentación proporcionada por el Despacho del Viceministro para el Dialogo Social y los Derechos Humanos** en los siguientes términos:

**I.HECHOS NARRADOS POR EL ACCIONANTE**

La acción de tutela de la referencia es promovida por la señora Diana Paola Hurtado Fajardo, identificada con cédula de ciudadanía No. 34.326.072 expedida en Popayán, actuando en calidad de representante legal de la Fundación Athyra, identificada con NIT 902.010.519-5, en contra del Ministerio del Interior y de FINDETER, en su calidad de operador del Ministerio del Interior, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a



la presunción de inocencia, al derecho de petición, al acceso al desempeño de funciones públicas y al buen nombre, con base en los siguientes hechos:

La accionante señala que la Fundación Athyra participó en la convocatoria denominada Banco de Iniciativas Comunitarias – BIC 2025, adelantada por FINDETER en calidad de operador del Ministerio del Interior, presentando la iniciativa identificada con ID 1220, denominada "Los Derechos Humanos También Tienen Rostro de Mujer" – Escuela de Liderazgo, Participación y Diálogo Social para Mujeres y Jóvenes de Popayán – Cauca, con enfoque de Derechos Humanos, Género y Construcción de Paz, cumpliendo con los requisitos establecidos en los Términos de Referencia (TDR). Indica que durante el proceso de evaluación la iniciativa fue inicialmente rechazada por FINDETER, lo que motivó la interposición de solicitudes de reconsideración y reclamaciones formales, en las cuales señala se evidenciaron inconsistencias en la evaluación y en las respuestas emitidas.

Manifiesta que, en el marco de una primera acción de tutela interpuesta por la misma situación, FINDETER rindió informe ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras con Enfoque Étnico de Popayán, indicando que la iniciativa había sido habilitada en la plataforma y que se encontraba incluida en el listado de iniciativas a financiar, en proceso de consolidación para ser remitida al Viceministerio para el Diálogo Social y los Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Con fundamento en dicha manifestación, el juez constitucional declaró la carencia actual de objeto, al considerar que la presunta vulneración de derechos fundamentales había sido superada.

Indica la accionante que, con posterioridad a dicha actuación judicial, FINDETER no la incluyó en las etapas subsiguientes del proceso de financiación, ni le remitió comunicación alguna sobre su vinculación, evidenciándose una contradicción entre lo informado al juez constitucional y la actuación administrativa desplegada. Señala que, ante nuevas solicitudes elevadas por la fundación, FINDETER emitió comunicación oficial el 24 de abril de 2026, en la que, si bien reconoce que la iniciativa fue habilitada, sostiene que no fue priorizada para financiación, introduciendo como fundamento un nuevo criterio consistente en la existencia de un supuesto "hallazgo en compliance de carácter penal" asociado



a la representante legal, correspondiente a una denuncia por violencia intrafamiliar en etapa de indagación, sin imputación formal, acusación ni sentencia condenatoria en firme. La accionante alega que dicho criterio no se encuentra contemplado dentro de las causales taxativas de exclusión establecidas en los TDR de la convocatoria BIC 2025, razón por la cual estima que su exclusión del proceso de financiación es arbitraria y vulneradora de sus derechos fundamentales.

## **II. DERECHOS FUNDAMENTALES PRESUNTAMENTE VULNERADOS**

El accionante alega la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la presunción de inocencia, al derecho de petición, al acceso al desempeño de funciones públicas y al buen nombre, consagrados en los artículos 23, 29 y 15 de la Constitución Política de Colombia.

## **III. PRETENSIONES OBJETO DE AMPARO CONSTITUCIONAL**

De acuerdo con el escrito de tutela, el accionante solicita a su Honorable Despacho con relación al Ministerio del Interior como entidad vinculada a la presente acción de tutela:

*"PRIMERA. Amparar los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD, A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, AL DERECHO DE PETICIÓN, AL ACCESO AL DESEMPEÑO DE FUNCIONES PÚBLICAS Y AL BUEN NOMBRE de la Fundación ATHYRA, vulnerados por FINDETER, EN SU CALIDAD DE OPERADOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR en el marco de la Convocatoria Banco de Iniciativas Comunitarias – BIC 2025.*

*SEGUNDA. Ordenar a FINDETER, EN SU CALIDAD DE OPERADOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo, deje sin efectos la decisión mediante la cual excluyó la iniciativa identificada con ID 1220 del listado de iniciativas a financiar, por haberse fundamentado en una causal no incluida en los Términos de Referencia de la convocatoria, por vulnerar el debido proceso, la igualdad y la presunción de inocencia, al haberse fundamentado en un criterio no previsto.*

*TERCERA. Ordenar a FINDETER, EN SU CALIDAD DE OPERADOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR que evalúe y decida sobre la inclusión de la iniciativa de la Fundación ATHYRA en el listado de financiables, aplicando exclusivamente los criterios establecidos en los Términos de Referencia,*



*sin considerar valoraciones no previstas y, de cumplir los requisitos establecidos, proceda a su inclusión.*

*CUARTA. En caso de no acceder a la inclusión directa, ordenar a FINDETER, EN SU CALIDAD DE OPERADOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR retrotraer la actuación administrativa al momento previo a la exclusión de la iniciativa, garantizando una nueva evaluación ajustada estrictamente a los Términos de Referencia.*

*QUINTA. Ordenar a FINDETER, EN SU CALIDAD DE OPERADOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR que, en el marco de la presente convocatoria, se abstenga de aplicar criterios no previstos.*

*SEXTA. Ordenar a FINDETER, EN SU CALIDAD DE OPERADOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR emitir una respuesta clara, coherente, de fondo y jurídicamente sustentada, en la que explique de manera precisa las razones normativas de la exclusión de la accionante, en armonía con lo manifestado previamente en sede judicial." (SIC)*

#### **IV. RAZONES DE DEFENSA**

Una vez realizado el estudio de los hechos, derechos y pretensiones del medio de defensa constitucional, a continuación, se presentan las razones jurídicas y fácticas que facilitan la solicitud del Despacho de desvincular al Ministerio del Interior del actual trámite procesal:

##### **4.1. Carencia actual de objeto por hecho superado**

En atención a la situación advertida y con el fin de garantizar los derechos fundamentales invocados por la accionante —en especial el debido proceso, la igualdad y la presunción de inocencia—, FINDETER, en su calidad de operador del Banco de Iniciativas para las Comunidades BIC 2025 en virtud del Contrato Interadministrativo No. 1773 de 2025 celebrado con el Ministerio del Interior, procedió a realizar una revisión integral del caso concreto y remitió contestación de tutela ante este Despacho el día 30 de abril de 2026 **(Anexo 3)**.

En dicho documento, FINDETER acreditó de manera contundente que la acción constitucional se sustenta en una premisa fáctica superada. En efecto, el operador informó que la Fundación ATHYRA no se encuentra excluida del proceso de la Convocatoria BIC 2025; por el contrario, superó las etapas de habilitación, cumplió con los requisitos establecidos en los Términos de Referencia y fue



debidamente incluida en el listado de iniciativas a financiar, habiendo obtenido una ponderación de ochenta y un (81) puntos dentro del proceso de evaluación.

Respecto de la verificación de compliance que motivó la presente acción, FINDETER precisó que dicha validación constituye una debida diligencia aplicada de manera uniforme a la totalidad de los participantes de la convocatoria, en cumplimiento del numeral 3.1, causal 12 de los Términos de Referencia, que contempla como causal de exclusión la existencia de condenas ejecutoriadas relacionadas con Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT). Como resultado de las diligencias ampliadas adelantadas, FINDETER determinó que la anotación identificada en los registros de la representante legal de la Fundación ATHYRA corresponde a una denuncia por violencia intrafamiliar que se encuentra en etapa de indagación —sin imputación formal ni sentencia condenatoria en firme—, y que dicha anotación no constituye un delito LAFT. En consecuencia, el operador concluyó que no se configura la causal de exclusión prevista en los TDR y procedió a elevar la solicitud de financiación de la iniciativa ante el Comité de Bancos del Ministerio del Interior para **su aprobación definitiva**.

De esta manera, la pretensión principal de la accionante ha quedado íntegramente satisfecha con posterioridad a la interposición de la presente acción constitucional: la iniciativa se encuentra habilitada, ponderada y en proceso de financiación en igualdad de condiciones con las demás propuestas participantes, con cupos disponibles en la línea de inversión correspondiente. En consecuencia, se presenta la figura jurídica de la carencia actual de objeto por hecho superado, que opera cuando, entre la interposición de la tutela y el momento del fallo, desaparece la causa que originó la presunta vulneración por una actuación imputable a la entidad accionada, tornando innecesario cualquier pronunciamiento de fondo por parte del juez constitucional.

En ese sentido, vale traer a colación la sentencia T-117A de 2013 proferida por la Corte Constitucional<sup>[I]</sup>, que señaló:

*"(...) La Corte Constitucional, ha explicado que la carencia actual de objeto por hecho superado se origina cuando desaparece la afectación al derecho fundamental invocado. Así, por ejemplo, en la Sentencia T-570 de 1992, la Corte señaló que si bien la acción de tutela es el mecanismo eficaz para la protección de los derechos fundamentales cuando éstos resulten amenazados o vulnerados, si la perturbación que dio origen a la acción desaparece o es superada, entonces, el*



*petionario carece de interés jurídico ya que dejan de existir el sentido y objeto del amparo, razón por la cual habrá de declararse la carencia actual de objeto por hecho superado. La acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva y cierta del derecho constitucional fundamental presuntamente violado o amenazado, lo cual explica la necesidad del pronunciamiento del juez en sentido positivo o negativo. Ello constituye a la vez el motivo por el cual la persona que se considera afectada se dirige ante la autoridad judicial, de modo que, **si la situación de hecho de la cual esapersona se queja ya ha sido superada en términos tales que laaspiración primordial en que consiste el derecho alegado está siendo satisfecha, ha desaparecido la vulneración o amenaza y, en consecuencia, la posible orden que impartiere el juez caería en el vacío.** (...)” (Énfasis fuera del texto original).*

Así también lo ha señalado la honorable Corte Constitucional en la sentencia T-086 de 2020 [II], respecto al hecho superado, tiene lugar cuando desaparece la vulneración o amenaza al derecho fundamental invocado. Concretamente, la hipótesis del hecho superado se configura:

*“(...) Cuando entre la interposición de la acción de tutela y el fallo de la misma, se satisface por completo la pretensión contenida en la acción de tutela, es decir, que, por razones ajenas a la intervención del juez constitucional, desaparece la causa que originó la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del petionario. (...)”*

En este orden de ideas, habiéndose corregido la situación que dio origen a la presente acción constitucional mediante la habilitación de la iniciativa y su inclusión en el listado de financiación por parte de FINDETER, con posterioridad a la interposición de la tutela, la presente acción resulta improcedente por carencia actual de objeto por hecho superado.

#### **4.2. Consideraciones de Derecho Frente al Hecho Superado.**

Al respecto, la Corte Constitucional ha reconocido que antes de emitir un pronunciamiento de fondo en el marco de un proceso de tutela, pueden presentarse ciertas circunstancias que, por encajar en alguna de las hipótesis mencionadas en el literal anterior, hacen desaparecer el objeto jurídico de la acción, de tal forma que cualquier orden que pudiera emitirse al respecto “caería en el vacío” o “no tendría efecto alguno” [iii].





La primera modalidad, conocida como el hecho superado, se encuentra regulada en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991[iv], y consiste en que, entre la interposición de la acción de tutela, y el momento en que el juez va a proferir el fallo, se satisfacen íntegramente las pretensiones planteadas, por hechos atribuibles a la entidad accionada. De esta forma, pronunciarse sobre lo solicitado carecería de sentido, por cuanto no podría ordenarse a la entidad accionada a hacer lo que ya hizo, o abstenerse de realizar la conducta que ya cesó, por su propia voluntad. En este caso, el juez no debe emitir un pronunciamiento de fondo, ni realizar un análisis sobre la vulneración de los derechos, pero ello no obsta para que, de considerarlo necesario, pueda realizar un llamado de atención a la parte concernida por la falta de conformidad constitucional de su conducta, conminarla a su no repetición o condenar su ocurrencia.

De esta manera, para que se configure la carencia actual de objeto por hecho superado, deben acreditarse tres requisitos, a saber: (i) que ocurra una variación en los hechos que originaron la acción; (ii) que dicha variación implique una satisfacción íntegra de las pretensiones de la demanda; y (iii) que ello se deba a una conducta asumida por la parte demandada, de tal forma que pueda afirmarse que la vulneración cesó, por un hecho imputable a su voluntad. Así, esta Corte ha procedido a declarar la existencia de un hecho superado, por ejemplo, en casos en los que las entidades accionadas han reconocido las prestaciones solicitadas, el suministro de los servicios en salud requeridos, o dado trámite a las solicitudes formuladas, antes de que el juez constitucional o alguna otra autoridad emitiera una orden en uno u otro sentido.

Por su parte, el daño consumado se configura cuando, entre el momento de incoarse la acción de tutela y el pronunciamiento por parte del juez, ocurre el daño que se pretendía evitar. De esta manera, cualquier orden que pudiera dar el juez sobre las pretensiones planteadas, también “caería en el vacío”, por cuanto el objeto mismo de la tutela, que es lograr la protección inmediata y actual de los derechos fundamentales, ya no podría materializarse debido a la consumación del perjuicio que pretendía evitarse.

Finalmente, la situación sobreviniente se configura en aquellos casos en los que, entre la interposición de la acción y el momento del fallo, ocurre una variación en los hechos, de tal forma que: (i) el accionante asumió una carga que no debía asumir; (ii) a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado del proceso; o (iii) las pretensiones son imposibles de llevar a cabo<sup>169</sup>. En este escenario, a



diferencia del hecho superado, la presunta vulneración de los derechos no cesa por una actuación desplegada por la entidad accionada, sino por circunstancias ajenas a su voluntad.

De conformidad con lo expuesto, en caso de que, al momento de proferir el fallo, el juez observe una variación en los hechos que implique la configuración de alguno de los escenarios anteriores, corresponde a este declarar la carencia actual de objeto, toda vez que cualquier orden que pudiera impartirse sobre lo solicitado sería "inocua" o "caería en el vacío". En este orden para el caso en concreto, en efecto se configura la carencia actual del objeto, toda vez que se dio respuesta de fondo al derecho de petición del accionante, el cual fue debidamente comunicado.

## **V. PETICIONES**

En atención a los argumentos de defensa puestos en conocimiento de su despacho, se solicita respetuosamente lo siguiente:

**PRIMERO:** Sírvase declarar la carencia actual de objeto por hecho superado teniendo en cuenta que la Fundación Athyra se encuentra incluida en el listado de iniciativas que se financiarán dentro del Banco de Iniciativas para las Comunidades - BIC 2025

**SEGUNDA:** Como consecuencia de lo anterior, sírvase cierre y posterior archivo de la presente acción constitucional, conforme a los fundamentos de defensa planteados.

## **VI. ANEXOS Y PRUEBAS**

Se acompaña la presente copia de los siguientes documentos:

- 1.** Resolución No. 1289 del 02 de septiembre de 2025 "*Por la cual se efectúa un nombramiento ordinario de planta de personal del Ministerio del Interior y se termina un encargo.*" (**2 folios**).
- 2.** Decreto No. 714 del 5 de junio de 2024 "*Por el cual se modifica la estructura y funciones del Ministerio del Interior.*" (**13 folios**).
- 3.** Contestación de tutela FINDETER (**15 Folios**).





## VII. NOTIFICACIONES

Para efectos de notificaciones, se recibirán en el grupo de Gestión de Correspondencia ubicada en la Calle 12 B No. 8-38 de Bogotá D.C., o al buzón electrónico previsto para ello en los términos del artículo 197 de la Ley 1437 de 2011: [notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co).

<b>ACCIONANTE:</b>	FUNDACIÓN ATHYRA
<b>ACCIONADA:</b>	MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTRO
<b>RADICADO:</b>	68001-3109-014- <b>2026-00197</b> -00
<b>REFERENCIA:</b>	TUTELA
<b>ASUNTO:</b>	INFORME DE CONTESTACIÓN Y RECURSOS DE REPOSICION FRENTE AL AUTO No. 904 DEL 30 DE ABRIL DE 2026

Cordialmente,



**JUAN GABRIEL DURAN SANCHEZ**  
**Director Técnico**  
Dirección Jurídica  
Despacho del Ministro

**Proyectó:** Angela Bueno M. Apoyo Jurídico - DVD  
**Revisó:** Sergio Garzón -Asesor Jurídico -DVD  
**Revisó:** Rafael Álvarez, Abogado Contratista - GAT - DIJ  
**Aprobó:** Life Armando Delgado Mendoza - GAT - DIJ

[i]Sentencia T-075 de 2024. M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar. Consultada el 30 de abril de 2026 en: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2024/t-075-24.htm>

[ii]Sentencia T-010 de 2025. M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera. Consultada el 30 de abril de 2026 en: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2025/t-010-25.htm>

[iii]Sentencia T-066 de 2024. M.P. Vladimir Fernández Andrade. Consultada el 20 de marzo de 2026 en: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2024/t-066-24.htm>



Al contestar cite Radicado 2026-2-002000-020934 Id: 756966  
Remitente: OFICINA ASESORA JURIDICA  
Destinatario: JUZGADO 02 FAMILIA - CAUCA - POPAYAN  
Fecha: 04-05-2026 21:54:01  
Folios: 9  
Anexos: 2 Documentos electrónicos



[iv] Decreto 2591 de 1991. Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política. Diario Oficial. Año CXXVII. N. 40165. 19, noviembre, 1991. Pág. 1.